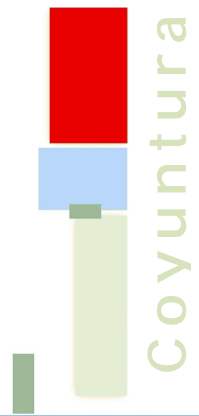


# HONDURAS: ENTRE ELECCIONES Y OPORTUNIDADES PARA ACTIVISTAS EN EL SIGLO XXI

Simone da Silva Ribeiro Gomes\*



Tegucigalpa, Honduras. Fotografía: Nayar López Castellanos.

## Resumen

El objetivo del presente texto es discutir acerca de las elecciones que se realizaron en Honduras a finales de 2017. A partir de una metodología cualitativa, de revisión bibliográfica, abordaremos la historia de los procesos electorales en este país, con énfasis en los golpes de Estado, incluido el de 2009 y las conse-

cuencias que han tenido en la sociedad en los años posteriores. En las conclusiones se apuntan las dificultades y oportunidades políticas para los activistas en este contexto adverso.

*Palabras clave:* Honduras, activismo, elecciones, oportunidades políticas, movimientos sociales.

En la noche del 26 de noviembre de 2017, un sorprendente anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) daba como ganador en la elección para presidente de la República a la Alianza de Oposición, formada por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partido Innovación y Unidad (PINU), cuyo candidato

\* Doctora en Sociología (Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro), magíster en Sociología (Paris 7- Denis Diderot) y en Psicología Social (Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Líneas de investigación: movimientos sociales, narcotráfico, violencia política y teoría social latinoamericana.

fue el presentador de televisión y comentarista de fútbol, Salvador Nasralla. Sin embargo, este anuncio no tardó en ser revertido, y la victoria de Nasralla no se confirmaría en los próximos días, sino la de su contrincante, el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), quien inició otro período de gobierno, señalado ya como una dictadura. Tal vez lo sorprendente no era la victoria de Nasralla sino que la reconocieran y aceptaran, en este país conocido por sus *elecciones estilo Honduras*.

Esa misma Honduras, más o menos un año antes, el 3 de marzo de 2016, fue centro de la atención mundial la noticia del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, líder del pueblo indígena *Ienka*, integrante de la organización Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPHIN). Berta llevaba años recibiendo amenazas de los responsables de proyectos mineros, a causa de sus denuncias contra las concesiones de proyectos hidroeléctricos que, en caso de ejecutarse, expulsarían a las comunidades y contaminarían el medio ambiente, afectando de forma irreversible sus formas de vida. En los últimos años, el COPHIN había logrado que la mayor constructora de represas a nivel mundial, la empresa de propiedad estatal china Sinohydro,<sup>1</sup> abandonara sus proyectos en la zona, aunque posteriormente éstos serían retomados por empresas locales.

Las historias entrecruzadas de las últimas elecciones en Honduras y las violaciones de los derechos humanos de activistas y luchadores sociales, que a continuación presentamos, pretenden recuperar brevemente la historia política reciente de este país. Se ofrece una lectura retrospectiva que ayude a comprender el reciente proceso electoral de 2017, haciendo hincapié en el significado de tales procesos en

<sup>1</sup>Para más información sobre Sinohydro, véase <<https://www.bnamericas.com/company-profile/es/sinohydro-corporation-ltd-sinohydro>>.

un país desgarrado por la violencia, sobre todo la que se ejerce contra los activistas ambientales.

### Honduras: panorama mínimo

Honduras es considerado un país complejo por varias razones, entre las que abordaremos: sus altos niveles de pobreza, el escenario para los movimientos sociales y, finalmente, el cruce entre movimientos y violencia, enfocando el movimiento anti-extractivista. Iniciaremos con la memoria de las denuncias de corrupción, la violencia de las pandillas, y las consecuencias de situarse en la ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos.<sup>2</sup> Asimismo nos referiremos a los severos problemas de trata de mujeres y las altas tasas de emigración internacional.

## Bajo el neoliberalismo, las condiciones de pobreza se profundizaron en Honduras y en Centroamérica.

Honduras es un país con índices alarmantes de pobreza (Díaz, 2017), con cerca de 68,8% de su población considerada pobre, según datos de 2017. Un ajuste económico aplicado desde 2004 disparó las cifras del desempleo. Por ejemplo, la tasa de desempleo abierto pasó de 4.3% en 2011 a cerca de 8% en 2017, con más del 50% de la población subempleada (Suazo, 2017), siendo las mujeres a las que más les afecta, pues siguen teniendo los salarios peor remunerados. En términos económicos, el país tiene una estructura económica no-diversificada, dependiente de la exportación de *commodities* agrícolas y de algunas maquilas (Cordero, 2009).

Bajo el neoliberalismo, las condiciones de pobreza se profundizaron en Honduras y en Centroamérica, esta última actualmente considerada la región más desigual y con menor movilidad social en el planeta, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales

<sup>2</sup> Se estima que cada año pasan por el país de 140 a 300 toneladas de cocaína.

(2011). Además, se agudizó el incremento de los flujos migratorios hacia Estados Unidos, sobre todo desde la década de 1980.

En este contexto tan adverso, la población hondureña sigue manifestándose con relativa frecuencia. Por ejemplo, en 2012 se formó una cooperativa de trabajadores de haciendas de melón, en el nuevo Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) (Labornotes, 2017), en la ciudad de Choluteca. En este sindicato, la mayoría son mujeres que reciben menos que el promedio mínimo en el país para los trabajadores agrícolas, 6,848 lempiras semanales (cerca de 292,15 dólares). La perversa *flexibilidad* laboral gana relevancia en un país donde las oportunidades de empleo son limitadas.

El STAS ejemplifica una nueva generación de sindicatos rurales, como es el caso de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), fundada también en 2012. La respuesta inicial de los empleadores a la organización de los trabajadores de la industria del melón fue la intimidación, las amenazas y los asaltos, sobre todo contra los líderes de los trabajadores organizados.

En 2011 se incrementaron las movilizaciones, junto a la creciente identificación del presidente Manuel Zelaya, del Partido Liberal (PL) con la izquierda en años previos (Cunha Filho *et al.*, 2013). Su gobierno (2005-2009) abandonó gradualmente medidas de derecha para identificarse con el ciclo progresista en América Latina.<sup>3</sup> Al mismo tiempo, nuevos actores

<sup>3</sup>El ciclo progresista en América Latina puede ser entendido como el periodo de los gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) en Venezuela (a quien le sucedió Nicolás Maduro en 2013); Inácio Lula da Silva (2003-2010, sucedido por Dilma Rousseff, 2011-2016) en Brasil; Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en Argentina; Tabaré Vázquez (2005-2010 y luego desde 2015) en Uruguay; Michelle Bachelet (2006-2010 y luego 2014-2018) en Chile; Evo Morales (desde 2006) en Bolivia; Rafael Correa en Ecuador (2007-2017); Daniel Ortega

sociales, incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de derechos humanos, se volvieron más activos a partir de sus esfuerzos de superación después del huracán Mitch, en 1998.<sup>4</sup> Sin embargo, los movimientos hondureños, aunque más fuertes, siguen sufriendo comparados a otros países latinoamericanos (Castellanos, 2006).

## El FNRP contaba con sectores campesinos, indígenas, obreros, sindicatos y jóvenes organizados...

Como respuesta al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya,<sup>5</sup> ya existían sindicatos, movimientos campesinos y ONGs que se agruparon en el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), antes nombrado *La Resistencia*. Este mismo año se observó en Honduras una división de la población entre golpistas y no golpistas. El FNRP contaba con sectores campesinos, indí-

genas, obreros, sindicatos y jóvenes organizados, sumando cerca de 25 mil miembros (Cabral, 2011).

Esas organizaciones protagonizaron, con personas provenientes de todas partes del país, protestas diarias, a pesar de la fuerte represión policiaca. La fuerte resistencia dio inicio a un largo proceso de construcción de un movimiento no violento, congregando personas de diferentes generaciones y activismos que fue conocido como la *primavera hondureña* (Villeda, 2014), notablemente inspirada en los eventos de Egipto, Túnez y la *primavera árabe*.

Además de la pobreza, la violencia es otro de los más grandes problemas en Honduras. Según datos de 2015, tiene una tasa de homici-

(desde 2007) en Nicaragua y Fernando Lugo (2008-2012) en Paraguay.

<sup>4</sup>El huracán Mitch ha sido uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en 1998. Provocando miles de millones de dólares en pérdidas materiales, golpeando Honduras como un huracán de categoría menor. Las muertes ocasionadas por las inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico, con cerca de 11 000 personas muertas y alrededor de 8 000 desaparecidas hasta finales de 1998.

<sup>5</sup>Sobre el golpe de Estado de 2009 abordaremos más en las páginas siguientes.

dios de 90 por cada 100.000 habitantes (Martínez, 2016). La capital, Tegucigalpa, es considerada una de las ciudades más violentas del mundo, con cerca de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En términos de violencia de género, de 2005 a 2012 se dio un incremento de los femicidios del 246%, sólo en el año 2012 presentó un incremento del 30% con respecto a 2011 (Observatorio de la Violencia/UNAH, 2013).

El país también sufre una alarmante tendencia a la privatización de la seguridad pública. En la región considerada la más violenta del istmo, junto con El Salvador y Guatemala, más de 200.000 personas participan como activos de fuerzas de seguridad que responden a corporaciones privadas. El aumento de poder del crimen organizado ha derivado en el desbordamiento de la delincuencia común, un espacio que ha sido dejado a las corporaciones privadas. Según cifras de la Federación Panamericana de Seguridad Privada (2013), en los últimos años Honduras duplicó el número de agentes de la Policía llegando a 29.000, en una región conocida por su alarmante inseguridad (UC, 2014).<sup>6</sup>

Además, la violencia en Honduras es también (mal) dirigida a los movimientos sociales. El preocupante número de asesinatos de dirigentes sociales en el país atraviesa el tejido social y también afecta la dinámica electoral. En este país, hay un alto número de concesiones mineras, cerca de 31% del territorio hondureño (Nolasco, 2011). De hecho, el extractivismo en Honduras tiene una función geopolítica estratégica con efectos societarios perversos, como demuestra la recurrente muerte de activistas ambientales. El respaldo a la minería internacional data de 1990, cuando se crearon y

<sup>6</sup> Para más información, véase: <http://www.forodeseguridad.com/instit/latam/febasep.htm>, [consulta: 24 de enero de 2018].

reformaron legislaciones y códigos para ofrecer seguridad jurídica a las empresas transnacionales. De esta forma Honduras, en 1998 y nuevamente en 2013, modificó su marco jurídico minero para allanar la implantación del extractivismo minero en su territorio, generando incentivos fiscales para las inversiones transnacionales y el aumento de las tasas de ganancia de las empresas (Martínez Espinoza, 2016).

En términos de violaciones de derechos humanos, Honduras también posee un alarmante índice de inseguridad laboral para los periodistas desde 2010, por el aumento del acoso y ataques, como lo demuestra la muerte de seis periodistas en los primeros meses de este año, el aumento de la impunidad y la falta de investigación de esas muertes.<sup>7</sup> Este panorama de violencia dirigida a los defensores de derechos humanos, activistas y periodistas puede ser mejor comprendido a partir de un breve esbozo histórico de procesos de guerras y resistencia en Honduras que expongo a continuación.

### Perspectiva histórica

En términos históricos, importa señalar la larga historia de la resistencia hondureña, proveniente de las comunidades indígenas lenças, organizadas por sus jefes, que resistieron valientemente el cerco español por casi cinco años.<sup>8</sup> Para Pastor (2013), fue en las nuevas villas españolas en este país donde se organizó

<sup>7</sup> Además, el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) señaló la muerte de los siguientes periodistas asesinados entre el 3 de julio de 2009 y mayo de 2011: Gabriel Fino Noriega, Joseph Hernández Ochoa, David Enrique Meza, Nahúm Palacios, José Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Luis Antonio Chávez Hernández, Luis Arturo Mondragón, Israel Díaz Zelaya, Henry Suazo, Héctor Francisco Medina Polanco y Luis Mendonza.

<sup>8</sup> Aunque cada campaña colonizadora culminó con la esclavitud masiva de los vencidos, los rebeldes, tratados como premio del conquistador

el lavado del oro en las corrientillas de agua que sacan el mineral de la montaña, con el trabajo de los indios esclavizados. En el siglo XVI el líder lenca *Cicumba*, del pueblo *Tolupán*, fue apresado por protestar contra este abuso y murió en prisión, tal como Berta Cáceres en el siglo XXI. La producción minera en este país tuvo su esplendor a finales del siglo XVI, recuperándose relativamente tiempo después.

Es también esencial recuperar en este texto la historia electoral del siglo XX. Mientras que en el siglo XIX desaparecían en el istmo los partidos políticos, en Honduras éstos proliferaron, aunque no lograron representar bases sociales para un mandato estable. En este país, por lo tanto, se organizaron nuevos partidos afiliados a la democracia cristiana y a la socialdemocracia (Pastor, 2013).

En 1957 Honduras tuvo un proceso electoral considerado pacífico, en el cual fue electo el liberal Ramón Villeda Morales, que pronto promulgó una nueva Constitución desatando la desconfianza y el miedo de la oligarquía hondureña, frente al triunfo del comunismo en Cuba. Esa historia reciente tuvo un intervalo –entre los años de 1945 y 1963– de gobiernos democráticamente electos que promulgaron reformas sociales con un sentido del interés general. Sus programas políticos buscaban legitimidad, en general, seguro social, salud pública, educación universal, reforma política, sufragio femenino y reformas fiscales que, por ejemplo, establecían un impuesto sobre la renta. Por otro lado, en 1962 fue legislada una Reforma Agraria en Honduras que no favoreció a los propietarios pues se proponía asentar al campesinado desplazado de las guerras en la región centroamericana.

El proceso democrático hondureño fue interrumpido con un golpe de Estado en 1963, al *estilo Honduras*, hecho que provocó la burla de la prensa mundial. Según Pastor (2013), un importante actor en este periodo fue la

oligarquía local encabezada por el coronel Osvaldo López Arellano, que estuvo en el poder de 1963 a 1974.

En 1969 estalló la llamada Guerra del Fútbol<sup>9</sup> entre Honduras y El Salvador, ambos países gobernados por dictadores militares. Este conflicto, según Mas (2008), enunciaba una crítica a los alcances del proyecto integracionista en un momento en que se experimentaba un importante crecimiento económico en la región, propiciado por una ampliación de la agroexportación y cierta modernización productiva. Este proyecto fue constreñido por limitaciones estructurales, como la transacción política entre la oligarquía vinculada al agro, en la cual no se modificaron las altas tasas de concentración de la propiedad ni los patrones productivos en el sector campesino.

### El proceso democrático hondureño fue interrumpido con un golpe de Estado en 1963...

El periodo que va de 1963 a 1982 es considerado como de dictadura militar. Esos regímenes, para Pastor (2013), fueron legalizados más tarde o sucedidos por gobiernos “elegidos” en procesos electorales manipulados, o “golpeados” en otras ocasiones.

Para este autor, al mismo tiempo que se arrinconó a los partidos del poder efectivo, la dictadura –especialmente entre 1972 y 1980–, se impidió captar la fuerza de los nuevos sectores sociales organizados en centrales campesinas, sindicatos obreros, quedando al margen del sistema partidista. Es decir, aunque participaron en las negociaciones cotidianas mediante las cuales se ejerce el poder, tales organizaciones no obtuvieron satisfacción a sus demandas y resintieron aún más su relativa

<sup>9</sup> La Guerra del Fútbol fue un conflicto armado ocurrido del 14 al 18 de julio de 1969, entre El Salvador y Honduras, llamada así por coincidencia de la tensión entre ambos países con un partido de fútbol, que el 26 de junio de este año, enfrentó a ambas selecciones, en las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1970. Entre las consecuencias de esa guerra, fueron entre 4.000 y 6.000 los civiles muertos y hubo más de 15 mil heridos.

marginación del sistema político tradicional (Pastor, 1986).

En este contexto, la década de los ochenta también estuvo marcada por el escándalo de la *Contra*, cuando Estados Unidos financió una contraguerrilla para detener al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en Nicaragua, y por el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto salvadoreño contra el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Según Villeda (2014), Honduras también contó con grupos izquierdistas y revolucionarios en este periodo, cuyos activistas fueron desaparecidos, muertos o escaparon del país para unirse al FMLN y al FSLN. Sin embargo, desde este periodo se muestra que la ubicación de Honduras era estratégica para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, sobre todo para la agenda de los grupos de derecha.

De hecho, la primera convocatoria de elecciones se realizó en 1981, cuando se convocó una Constituyente después de la dictadura militar. Entre los años 1984-1990, el presidente Carlos R. Reina gobernó Honduras, luchando en defensa de los derechos, rescatando de manos de los militares una buena parte de la administración pública, y resistiendo a la presión y las amenazas de golpe. Además, en ese periodo, muchos desplazados de la guerra radicados en países vecinos regresaron a sus hogares.

Así es como llegamos al tiempo presente, en que a pesar de toda la riqueza en recursos naturales, Honduras ocupa hoy el tercer lugar como país más pobre del mundo, y el segundo más inequitativo del continente americano. En 2007 bajo el gobierno de Manuel Zelaya, el ingreso per cápita subió por primera vez de manera apreciable después de 35 años, con mejoras respaldadas por el ascenso de la popularidad de este presidente (Pastor, 2013).

En el siguiente apartado nos referiremos al periodo de gobierno del presidente Zelaya.

### **Consideraciones sobre el golpe de Estado de 2009**

Es importante rescatar la narrativa de la historia contemporánea hondureña, que pone énfasis en el retorno de la democracia en 1992, en un sistema político considerado como uno de los más institucionalizados en América Latina, que mantiene una hegemonía polarizada entre dos partidos políticos ubicados a la derecha del espectro ideológico, el Partido Liberal (PL) y el Partido Nacional de Honduras (PN). Para Cunha Filho *et al.* (2013), las contiendas electorales entre los dos partidos se centran más en las diferencias relativas a las personalidades de los candidatos que en sus diferencias ideológicas o propuestas políticas.

En este texto nos referimos al gobierno del ex presidente Manuel Zelaya, electo en 2005 y que fue depuesto el 28 de junio de 2009 mediante un golpe de Estado. El golpe se dio en el marco de una crisis económica que se arrastraba desde el año anterior, el aumento de la migración hondureña, sobre todo hacia Estados Unidos, la deportación masiva, y el encarcelamiento de muchos de estos migrantes –

accediendo al sistema legal que los criminaliza doblemente. El desempleo de los migrantes retornados tuvo efectos perversos en la economía hondureña en 2009, cuando las remesas bajaron casi un 8% (Fasquelle, 2011). El éxito del golpe implicó la continuación de la dependencia de Estados Unidos que caracteriza el país desde su independencia formal en 1821.

La propuesta de Manuel Zelaya de realizar una consulta a la población sobre la modificación de la Constitución de 1982 fue determinante para el golpe en 2009. Según Villeda (2014),

... la ubicación de Honduras era estratégica para los intereses geopolíticos de Estados Unidos...

ésta era una forma de revertir una serie de desigualdades sociales impuestas a las poblaciones indígenas y afroamericanas, así como a las mujeres y los trabajadores, previamente excluidos de la protección estatal. Además, algunas de sus medidas consideradas impopulares antes del golpe contemplaban la propuesta de legalizar las drogas, tomando en cuenta el gran problema que representa el hecho de que el territorio hondureño sea utilizado para el tráfico de drogas con destino a Estados Unidos, el hacinamiento, la violencia de las pandillas, entre otros efectos de la guerra contra las drogas.

Este golpe se dio 35 años después del golpe de 1978, teniendo ambos algunas similitudes en la manera en que se limitó el alcance de los movimientos sociales. Según Pastor (2013), en 2009 el pueblo hondureño ya no era el mismo que décadas atrás reaccionaba con apatía e indiferencia. Por su parte, Manuel Zelaya también reaccionó de manera diferente, emprendiendo una peregrinación para pedir ayuda ante el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) y realizando visitas oficiales en distintos países. Finalmente terminó por refugiarse en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa por algunos meses.

Sin embargo, desde el 2009 ya se observaba un incremento paulatino de la abstención electoral, revelando la erosión de las bases electorales de los partidos tradicionales, PH y PL. Asimismo, la afirmación de un voto cruzado, tras las reformas que introducen boletas separadas para las elecciones legislativas y municipales a partir de 1997, dejó a los nuevos presidentes sin mayorías parlamentarias y los obligó a concertar con la oposición. Con todo, el PL y el PN se encontraban, hasta 2009, entre los partidos que resistían mejor la crisis de representación que parecía afectar a toda Améri-

ca Latina. El golpe de 2009, representó una vuelta al pasado, y trajo a la memoria los golpes sucesivos contra los gobiernos constitucionales de Ramón Villeda Morales (1957-1963) y Ramón Ernesto Cruz Uclés (1971-1972), pero también contra el gobierno encabezado por Julio Lozano Díaz (1954-1956) (Sonnleitner, 2010).

Es importante mencionar el hecho de que en 2005 Manuel Zelaya inició su gobierno con posiciones de derecha manifestando su deseo de mantener el *status quo*, aunque sorprendido con la introducción de la paridad de género en la distribución de sus plazas en el gobierno. Sin embargo, su administración tuvo una inflexión hacia la izquierda al participar en los festejos del 28° aniversario de la Revolución Sandinista en Nicaragua en 2007, generando críticas de Estados Unidos y de la derecha hondureña, y en iniciativas regionales de petróleo, como el Acuerdo Petrocaribe, una iniciativa regional venezolana para proveer petróleo y derivados para la región.

En este sentido, de acuerdo con Villeda (2014), es importante entender el golpe como una reprimenda a los movimientos progresistas de Honduras, ejecutado en colaboración con la élite del PL, sectores militares y el ala conservadora de la Iglesia Católica. Tales sectores habían sido aliados del presidente Manuel Zelaya, antes de su transformación en un presidente comprometido con la izquierda de América Latina.

En julio de 2008 Zelaya anunció su intención de vincularse con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por Venezuela, una alternativa a la hegemonía de Estados Unidos. Esa decisión, junto con el aumento del salario mínimo, fue encarada con muchas críticas por parte de las élites hondureñas, provocando la polarización del país. Su decisión de adoptar *el Gobierno del Poder Ciudadano*, también implicó una pérdida de apoyo interno en su partido, seguida de una

... es importante entender el golpe como una reprimenda a los movimientos progresistas de Honduras...

crisis institucional que terminó con el golpe, desde el secuestro del presidente por las fuerzas militares el 28 de junio de 2009 en su casa, hasta su exilio en Costa Rica.

La situación de lo que se anunció como un nuevo golpe en 2017, es decir, la reelección de Juan Orlando Hernández, es similar a la de otros golpes, como en noviembre de 2011, cuando partidarios del LIBRE, salieron a votar. Pronto quienes estaban en las calles percibieron las inconsistencias y los indicios de fraude en las elecciones, cuando este mismo partido fue dejado de lado por la derecha, y frente a la negligencia del Colegio Electoral y la Suprema Corte de Honduras. La esperanza de no le fuese robada la presidencia al LIBRE era grande entre el pueblo, después de la organización de muchos frentes de izquierda desde el golpe de 2009 (Villeda, 2014).

En las elecciones de 2013, ganadas por Juan Orlando Hernández, las fuerzas progresistas se organizaron mejor teniendo como candidata a Xiomara Castro de Zelaya, esposa de Manuel Zelaya. Sin embargo, Juan Orlando Hernández vence en una jornada electoral fuertemente militarizada, documentándose casos de coacción e irregularidades (Tavares, 2017). A las elecciones le siguió la denuncia de fraude electoral, pero pronto se manifestó el respaldo internacional al golpe, provocando una nueva ola de protestas.

Todo lo anterior nos permite analizar de mejor forma la jornada electoral de 2017 cuando el Tribunal Nacional Electoral (TNE), con el apoyo de iglesias, algunas empresas ligadas a la maquila y empresas extractivas, dirigentes campesinos corruptos y la mayor parte de los medios televisivos dio a conocer los resultados donde se declara vencedor Juan Orlando Hernández, aunque por poco margen. En el caso de la embajada estadounidense, llama la atención su silencio cómplice, y era de esperar que reconozca a Juan Orlando Hernández co-

mo presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo aunque sea una elección ilegítima, y su gobierno haya sido cuestionado por actos de corrupción (Suazo, 2017).

Como fue señalado en un reciente comunicado del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO, 2017), si se respetara la victoria de Salvador Nasralla, sería la primera vez en décadas que Honduras tendría un presidente constitucional no proveniente del PL o el PN, en lo que Pastor (1986) define como un sistema bipartidista en la práctica, que gira en torno a dos partidos tradicionales: el Liberal y el Nacionalista.

Para Bahr (2017), desde hace más de un siglo que el PN y el PL controlan el sistema político hondureño, lo que ha derivado en la consideración de este país como uno de los sistemas bipartidistas más estables de América Latina. En gran medida, este éxito es debido a la capacidad de sus élites políticas para pactar en coyunturas críticas. No obstante Bahr cree que la fragilidad democrática hondureña actual se debe a la incapacidad de negociación y acuerdos a través de las instituciones y en los espacios ocultos de esas élites gobernantes, desde 2009, incapaces de solucionar un conflicto gestado al interior de sus élites políticas. A nueve años del golpe, permanece la polarización política y social y una pérdida de legitimidad institucional.

... desde hace  
más de un siglo  
que el PN y el PL  
controlan el  
sistema político  
hondureño...

Desde 2013 que Juan Orlando Hernández está en el poder, se han llevado a cabo controvertidas reformas en instancias judiciales como la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. De hecho, en 2015 la Corte Suprema de Justicia dio luz verde a su reelección, anteriormente prohibida y utilizada como justificación jurídica para el golpe en 2009. De la misma manera el gobierno de Hernández ha profundizado la influencia sobre los medios de

comunicación masivos y sus relaciones de lealtad con el Ejército.

Por todo lo anterior, a finales de diciembre de 2017, el anuncio de Salvador Nasralla sobre su retiro de la contienda y la victoria anunciada de Juan Orlando Hernández, con el apoyo de Estados Unidos (McGovern, 2017), no resultaron tan sorprendidas, aunque no dejen de indignar a los ciudadanos hondureños. No obstante, es importante considerar que su reelección no era considerada segura, pues alrededor de 75% de la población (Suazo, 2017) se manifestó en contra de su candidatura, considerada ilegítima.

El presidente Juan Orlando Hernández ha sido considerado el principal responsable del creciente desplazamiento de la población campesina e indígena de sus territorios, sobre todo por sus vínculos con las transnacionales extractivas. Además, su gobierno fue denunciado internacionalmente por violaciones a los derechos humanos, siendo el caso más emblemático el asesinato de Berta Cáceres en 2016, al que nos referiremos con más detalle en el siguiente apartado.

### Las oportunidades políticas para los y las activistas

Durante las protestas por la ausencia de nitidez en el resultado de las elecciones en noviembre de 2017 murieron 34 personas<sup>10</sup> en las calles de

<sup>10</sup> Los nombres y edades de algunas de las 34 personas muertas en las protestas son: José Abolió Soto, 46 años; Roger Alberto Vázquez 35 años; Víctor Evelio Martínez, 23 años; José David Ramos Lambert, 22 años; José Fernando Melgar, 16 años; Kimberly Dayana Fonseca, 19 años; Eric Javier Montaña Cruz, 27 años; Raúl Antonio Triminio Sisnado, 35 años; Eduardo Rubén Rivera, 35 años; Milton Orlando Rivera Cortes, 30 años; Israel Hernández Varela, 42 años; Mauricio Jonathan Echeverría, 23 años; Michael Jair Ponce Sucedá, 15 años; Virgilio Yareth Ávila González, 15 años; Arnold Fernando Serrano Moncada, 32 años; Raúl Humberto Brizuela Reyes, 21 años; Jesús de María Sánchez Euceda, 43 años; Zet Jonathan Araujo Andino, 30 años; Lesman Anibal Cárcamo Bonilla, 18

Honduras, manifestándose contra lo que se considera un gobierno dictatorial más de Juan Orlando Hernández. Los activistas exigen que se atienda el verdadero riesgo de que el gobierno incremente sus acciones represivas y la militarización de sus territorios, particularmente los concesionados a empresas extranjeras. En términos de oportunidades para los/las luchadores/as sociales, la situación se vuelve cada día más compleja.

Actualmente se observa una preocupación real con los/las luchadores/as sociales en Honduras y todo lo que implica la criminalización de sus actividades en un país, en el que se contabilizaron, de 2012 a 2014, 3.064 casos de criminalización de defensores de derechos humanos. Los números son: 111 asesinatos de personas relacionadas con la defensa de sus recursos naturales, 162 campesinos procesados por actividades de defensa y promoción de los derechos humanos y más de 80 temporalmente encarcelados entre 2009 y 2012 (Martínez Espinoza, 2016).

Según cálculos de organizaciones campesinas en Honduras, es asesinado(a) un(a) activista campesino(a) cada tres días, por luchar por su territorio. Territorios estos cada vez más concesionados a empresas transnacionales. En 2015 fueron 64 proyectos de minería aprobados y actualmente 533 en proceso de aprobación. Villeda (2014) habla de 3.033 prisiones ilegales y

4.344 violaciones de derechos humanos durante el golpe de 2009 y meses subsecuentes.

Así, se puede afirmar que Honduras enfrenta actualmente un proceso de abierta criminalización de la protesta social, ejecutado por instituciones estatales para enfrentar las luchas

años; David Octavio Quiroz, 32 años; Brayan Noé Mejía González, 26 años; Delmer Josué Medina, 28 años; Nicol Ayala, 13 años; Marlon Mendoza Herrera, 26 años; Cristian Fúnez, 24 años; Jarol Uriel García, 36 años y Juan Carlos Flores, 26 años.

Según cálculos de organizaciones campesinas en Honduras, es asesinado(a) un(a) activista campesino(a) cada tres días...

sociales así como una política de control del descontento social que se materializa a través de diferentes acciones, tales como: a) represión desproporcionada de manifestantes; b) investigación y persecución penal del grupo social (principalmente a los líderes de los movimientos); c) detenciones arbitrarias y otras violaciones al debido proceso; d) identificación de luchadores sociales como delinquentes; e) creación de sanciones administrativas y delitos *ad hoc*; f) agravamiento de las acusaciones; g) ilegalización de la protesta social; y h) falta de un debido proceso penal (Cortez, 2008).

El proceso de criminalización conduce a la normalización de un repertorio oficial de acciones caracterizadas por ser violatorias de los derechos humanos provocando que prevalezca la impunidad, procesos judiciales amañados, encarcelamientos injustificados y desapariciones forzadas, se someten a los movimientos sociales a una dinámica de largas confrontaciones legales que los desgasta internamente y los coloca en una profunda desventaja en términos de recursos, tanto económicos como profesionales. A esto se suma la desmovilización social, producto de la represión directa o del temor en los sectores sociales potencialmente aliados que desisten de participar ante el alto riesgo de perder su libertad (Palau y Corvalán, 2008; Zapata, 2010).

El trabajo de defensa de los territorios y el activismo ambiental en el frente de resistencia contra las hidroeléctricas, la minería y la agroindustria es percibido como terrorismo por el gobierno. Además, la criminalización de la protesta va de la mano con la militarización de territorios con la ayuda recibida del gobierno norteamericano (Bird y Main, 2017). La seguridad en Centroamérica es central para Estados Unidos y por lo tanto, Honduras recibe

una generosa ayuda financiera, lo que acarrea el aumento de la militarización, sin garantías de que esto se traduzca en políticas efectivas de seguridad para los hondureños. Al contrario, el aumento de los militares en este contexto ha acarreado enormes sufrimientos. Eso parece especialmente grave en Honduras, con el involucramiento de las fuerzas armadas y de cuadros políticos en la muerte de luchadores sociales, como en el caso de Berta Cáceres. Aunque la ayuda militar y policiaca de Estados Unidos no sea la única, sigue siendo la principal, con \$18 millones de dólares aprobados en 2016, sobre todo en una fuerza especial, creada en la década de 1980, teóricamente para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo, pero es probable que su uso más inmediato sea contra luchadores sociales.

Bahr (2017) afirma que es fundamental revertir la relación antagónica de las fuerzas de seguridad estatales contra los movimientos sociales que defienden el territorio y el ambiente, en que el asesinato de Berta Cáceres ha sido la mayor expresión.

El escenario actual es catastrófico, con la derecha en la presidencia del país, teniendo mayoría en el Congreso Nacional y a nivel municipal. La continuación de Juan Orlando Hernández en el gobierno le permite profundizar las medidas neoliberales en el país, así como la militarización de la seguridad, la criminalización y la violencia

contra defensores y defensoras de los derechos ambientales.

Asimismo, las reacciones de los gobiernos, de las empresas mineras y de los medios de comunicación masiva suelen subestimar sus preocupaciones y reprimir sus movilizaciones. De acuerdo con el informe *Cuando tiemblan los derechos: extractivismo y criminalización en América Latina* (2011), la descalificación pública de la protesta social y del activismo genera respues-

... la  
criminalización de  
la protesta va de la  
mano con la  
militarización de  
territorios con la  
ayuda recibida del  
gobierno  
norteamericano...

tas represivas que se justifican a través de leyes para personas, catalogadas como “delinquentes” y “terroristas”.

El ejemplo de México, en este sentido, puede ser importante para el análisis, ya que recientemente fue aprobada la Ley de Seguridad Interior (LSI) conocida popularmente como *ley anti-protesta*, aunque sea algo más que esto (Garduño, 2017). La reacción de la sociedad civil mexicana fue relativamente rápida, con protestas masivas, donde se denunció que dicha ley le daría poderes supremos a las Fuerzas Armadas para afianzar un régimen autoritario que no investiga las graves violaciones de derechos humanos, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos forzosos y los casos de tortura (Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, 2017).

### Reflexiones finales

Luego de concluida la jornada electoral de 2017, presentamos algunas reflexiones finales sobre el gobierno de Juan Orlando Hernández, mal evaluado en términos de derechos humanos, ejemplificado en el asesinato de Berta Cáceres, que sigue sin resolución. El Estado hondureño ha negado la posibilidad de dar a conocer a la comunidad internacional los autores intelectuales de ese crimen. Además, el modelo de extractivismo intensivo vigente en Honduras, ha generado conflictos en sectores de la economía tales como la minería, las represas, los monocultivos, el uso excesivo de químicos en la producción agrícola. Esperamos que la propuesta de enmiendas legislativas, como la de 14 de junio de 2016, llamada en Estados Unidos *Berta Cáceres Human Rights in Honduras Act*, presente un camino posible para inhibir más crímenes como ese.

... la  
concentración  
de poder de Juan  
Orlando  
Hernández ha  
dificultado que  
Honduras  
funcione como  
una verdadera  
república...

De esa forma, un balance de los cuatro años del último gobierno (2013-2017), es en general negativo. Para Sandra Maribel,<sup>11</sup> se aprovechó el golpe de Estado para otorgar más facilidades a la minería, con el apoyo de sectores de la Iglesia Católica y algunas organizaciones no gubernamentales. Además, la concentración de poder de Juan Orlando Hernández ha dificultado que Honduras funcione como una verdadera república, con el respaldo del poder judicial y ejecutivo, que le permite actuar con relativa impunidad.

Finalmente, hay que aclarar las situaciones de violaciones de derechos humanos con obras públicas en materia de seguridad, en que el país tiene el más alto gasto público en seguridad ciudadana en Centroamérica, pero paradójicamente sigue siendo el más inseguro del istmo. La policía militar, encargada del orden público,<sup>12</sup> creada en 2013, asumió muchos equipos de cateo, que están dispuestos a utilizar la fuerza extrema para defender los intereses de grupos minoritarios. Además, su uso se da notablemente en procesos electorales, para intimidar a la población.

Sin embargo, si la represión policiaca impidió que la gente saliera a las calles en el golpe de 2009, marchando todos los días del 28 de junio de 2009 hasta enero de 2010, buscando la restauración de la democracia, se espera que las manifestaciones continúen, demandando transparencia y procesos electorales justos en Honduras. En las elecciones de 2017, las protestas tampoco implicaron en la reversión de la dictadura actual, pero representaron una importante señal de resistencia del pueblo, un ejemplo desde

<sup>11</sup> Entrevista con Sandra Maribel. Dirección URL: <<https://guancascodemedios.org/materiales-audios/>>, [consulta: 17 de enero de 2018].

<sup>12</sup> Para más información, véase: <<http://pmop.ffaa.mil.hn/>>, [consulta: 2 de febrero de 2018].

Centroamérica para otros contextos en América Latina. A ver que sigue.

## Bibliografía

BAHR, Sergio Fernando (2017), "Honduras: el bipartidismo y el péndulo", en *Nueva Sociedad*, diciembre. Dirección URL: <<http://nuso.org/articulo/honduras-el-bipartidismo-y-el-pendolo/>>

BIRD, Annie y Alexander MAIN, "The Deadly Results of a D.E.A. Backed Raid in Honduras", 2 de julio. Dirección URL: <<https://www.nytimes.com/2017/07/02/opinion/-dea-honduras-drugs.html>>.

CABRAL, Larissa Bronze C. et al. (2011), *Honduras: jornalismo sob a mira de fuzil*, Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão, Curso de Jornalismo.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS TLACHINOLLAN (2017), "La apuesta por las armas", *Centro de Derechos Humanos Tlachinollan*, 18 de diciembre. <<http://www.tlachinollan.org/opinion-la-apuesta-las-armas/>>

CEPAL (2003), *Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2002-2003*, Santiago de Chile, CEPAL.

CORDERO, José Antonio (2009), *Honduras: Recent economic performance*. Dirección URL: <<http://www.cepr.net/documents/publications/honduras-2009-11.pdf>>.

CORTEZ, Edgar Morales (2008), "Criminalización de la protesta social en México", en *El Cotidiano*, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, vol. 23, núm 150, julio-agosto.

CUNHA, Clayton M., André Luiz COELHO, Fidel PÉREZ (2013), "A right-to-left policy switch? An analysis of the Honduran case

under Manuel Zelaya", en *International Political Science Review*, 34 (5).

DÍAZ, Elvin (2017), "Con más de seis millones de hondureños en condición de pobreza cierra el 2017", en *El Tiempo*, 24 de diciembre. Dirección URL: <<https://tiempo.hn/seis-millones-de-hondurenos-pobres-2017/>>.

FASQUELLE, Rodolfo Pastor (2011), "The 2009 Coup and the Struggle for Democracy in Honduras", en *NACLA Report on the Americas*, vol. 44, núm. 1.

GARDUÑO, Roberto (2017), "Ley de seguridad autoriza a fuerzas armadas actuar sin previa declaratoria política", en *La Jornada*, 29 de noviembre. Dirección URL: <<http://www.jornada.unam.mx/2017/11/29/politica/011n1pol>>.

INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS FISCALES (2011), *Relación Política Fiscal Política social en Centroamérica*, Guatemala, Foro Regional Situación Fiscal en Centroamérica "La necesidad de reformas con enfoque social".

LAKHANI, Nina (2017), "Berta Cáceres court papers show murder suspects' links to US-trained elite troops", en *The Guardian*, 28 de febrero. Dirección URL: <<https://www.theguardian.com/world/2017/feb/28/berta-caceres-honduras-military-intelligence-us-trained-special-forces>>.

MARTÍNEZ, Oscar (2016), *A history of violence: living and dying in Central America*, Verso Books.

MARTÍNEZ, Manuel Ignacio (2016), *La democracia entre despojos y resistencias: el extractivismo minero en Centroamérica*, Boletín CESMECA-UNICACH.

MAS, Jorge Rovira (2008), "Edelberto Torres-Rivas: la perspectiva Centroamericana", en *Centroamérica: entre revoluciones y democracia*.

- Edelberto Torres-Rivas. *Antología*, Buenos Aires, CLACSO.
- NOLASCO, Silvia (2011), *Impactos de la minería metálica en Centroamérica*, San Salvador, CEICOM/OCMAL.
- OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA-UNAH (2013), *Boletín especial sobre muerte violenta de mujeres*, Tegucigalpa, Edición Especial núm. 9.
- PALAU, Marielle y Román CORVALAN (2008), "Criminalización de movimientos sociales en Paraguay: algunos elementos para comprender su magnitud", en Kathrin BUHL y Claudia KOROL, *Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales. São Paulo, Brasil*, Instituto Rosa Luxemburg Stiftung, Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
- PASTOR, Rodolfo (1986), *La Trama-los Actores. El ocaso de los cacicazgos: historia de la crisis del sistema político hondureño*, Centro de Documentación de Honduras.
- PASTOR, Rodolfo (2013), *Historia mínima de Centroamérica*, Madrid, Turner.
- SONNLEITNER, Willibald (2010), "Las últimas elecciones en América Central: ¿El quiebre de la tercera ola de democratizaciones?", en *Foro Internacional*, México, El Colegio de México.
- SUAZO, Javier (2017), "FMI y las sombras del fraude y represión", en *Alai*, 20 de diciembre. Dirección URL: <<https://www.alainet.org/es/articulo/190007>>.
- TAVARES, Elaine (2017), "Honduras, de golpe em golpe", en *IELA*, 5 de diciembre. Dirección URL: <<http://www.iela.ufsc.br/noticia/honduras-de-golpe-em-golpe>>.
- VILLEDA, Suyapa (2014), "Honduras: Refounding the Nation, Building a New Kind of Social Movement", en Richard STAHLER-SHOLK, Harry E. VANDEN y Marc BECKER (editores), *Rethinking Latin American social movements: Radical action from below*, Rowman & Littlefield.
- UC, Pablo (2014), *La intermitente democracia en Centroamérica: reflexiones y recomendaciones*. Dirección URL: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20140909092711/PBFinalUc.pdf>
- ZAPATA, Francisco (2010), "Movimientos sociales y conflicto laboral en el siglo XX", en Ian BIZBERG y Francisco ZAPATA (coordinadores), *Movimientos sociales. Los grandes problemas de México*, México, El Colegio de México.